

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

Memoria Justificativa de la Necesidad

***“SERVICIOS INTEGRALES DE CERTIFICACIÓN
ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”***

La autenticidad de este documento se puede comprobar en <https://gestiona.comunidad.madrid/csv> mediante el siguiente código seguro de verificación



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “SERVICIOS INTEGRALES DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID” A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 7/2005, 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM núm. 311, de 30 de diciembre de 200), modificada parcialmente por la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 2015), por el Artículo 26 de la ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. núm. 304 de 22 de diciembre de 2022) y por el artículo 7 de la Ley 8/2024, de 26 de diciembre, de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. número 308 del 27 de diciembre de 2024) la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid (en adelante Agencia), se configura, de conformidad con la Disposición Adicional Octava de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid, como un ente público de los previstos en el Artículo 6 de la citada Ley, que perteneciendo a la Administración Institucional de ésta, es un Ente de Derecho Público, cuenta con personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y autonomía en su gestión, plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento de sus fines y con plena autonomía orgánica y funcional, que tiene por objeto, de acuerdo con las directrices establecidas por la consejería competente en materia de Digitalización, la planificación y ejecución de proyectos y servicios relacionados con tecnologías de la información, comunicaciones electrónicas y ciberseguridad, garantizando la interoperabilidad, escalabilidad, compatibilidad, suministro e intercambio de información, en el ámbito de actuación definido en el apartado dos de este artículo 10.

Entre las competencias que, conforme al Artículo 10 – Tres de la Ley 7/2005, de 23 de diciembre, se atribuyen a la Agencia, bajo la dirección y coordinación de la Consejería competente en materia de Digitalización, para el cumplimiento de sus objetivos, se recogen, en concreto, las siguientes:

d) La adquisición, el diseño, desarrollo, implantación, mantenimiento, gestión y evolución de la infraestructura tecnológica, sistemas de información y de comunicaciones electrónicas y seguridad de la información de titularidad de la Agencia, así como la ejecución de las actuaciones para su consolidación y racionalización, incluyéndose en particular el puesto de trabajo, las infraestructuras de almacenamiento, los centros de procesos de datos, incluido el uso de nubes públicas y privadas de la Comunidad de Madrid y el archivo electrónico único de los expedientes y documentos electrónicos.

La Agencia se integra dentro la estructura de la Consejería de Digitalización, que ostenta competencias en el ámbito de la digitalización de la Administración regional, y que pretende diseñar la hoja de ruta o estrategia a largo plazo del Gobierno regional en el ámbito de la modernización y la digitalización de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, contando para ello con la labor y el trabajo que ya que viene desarrollando esta Agencia, potenciando la coordinación con el resto de consejerías y la visibilidad de las medidas adoptadas, logrando en el ámbito interno aunar esfuerzos para el avance en la gestión del cambio, con el objetivo último de dotar a los ciudadanos y a los empleados públicos de la Comunidad de Madrid, de los medios, herramientas y

equipamientos, en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que faciliten su trabajo y lo hagan más eficiente a través del uso de las nuevas tecnologías.

Como respuesta a esta necesidad, la Comunidad de Madrid a través de Madrid Digital, viene ofreciendo un servicio de certificación electrónica, que permiten garantizar la procedencia, el momento y la integridad de los mensajes intercambiados a través de redes de telecomunicaciones, bien por parte de los propios empleados públicos como en las relaciones de la Administración con el ciudadano.

Por tanto, la utilización por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid de los diferentes sistemas de certificación electrónica resulta clave para conseguir el objetivo de garantizar el derecho de los empleados de la Comunidad de Madrid a relacionarse de forma segura por medios telemáticos cuando así se precise, así como para garantizar la relación de los ciudadanos con la Comunidad de Madrid a través de los diferentes canales digitales.

Estos sistemas de certificación electrónica deben cumplir principalmente, las especificaciones y normativas establecidas en las siguientes normas:

- Reglamento (UE) N.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior (en adelante Reglamento eIDAS), que tiene como objetivo reforzar el Mercado Único europeo otorgando un nivel de seguridad adecuado a los medios de identificación electrónica y los servicios de confianza,
- Reglamento (UE) 2024/1183 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) N.º 910/2014 en lo que respecta al establecimiento del marco europeo de identidad digital,
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su Capítulo V, referido al funcionamiento electrónico del sector público, una serie de requisitos y necesidades para el mismo que están asociadas al uso de sistemas y servicios de certificación electrónica como son: certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web para las sedes electrónicas, sistemas de identificación y firma para la actuación administrativa automatizada de órganos, entidades de derecho público, etc. y sistemas de identificación y firma electrónica para el personal, empleado público al servicio de la administración. Todo ello con las debidas garantías de seguridad e interoperabilidad.
- Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónico (RAFSPE)

La prestación de los servicios objeto de este contrato, requieren una disponibilidad tal que sólo pueden ser realizados por empresas que tengan la condición de Prestadores de Servicios de Certificación (Autoridad de Certificación), especializadas en la materia, y que posean el equipamiento, infraestructura, tecnología y conocimientos necesarios para llevarlos a cabo con medios propios.

La normativa eIDAS 2 establece un marco legal para la identificación electrónica y los servicios de confianza en la Unión Europea, incluyendo los certificados SSL/TLS. En línea con esta normativa, se han implementado cambios significativos en la duración de los certificados para mejorar la seguridad. Así, el grupo de entidades certificadoras "CA/B Forum" encargados de definir y gestionar

distintos estándares de certificación digital desde el año 2005, ha decidido reducir drásticamente el periodo de validez de los certificados TLS/SSL.

Si antes del año 2020 los certificados TLS/SSL tenían una validez de 825 días, a partir de ese año pasaron a tener una validez de 397 días y la tendencia sigue a la baja, impulsada por los navegadores y la normativa.

A partir del 15 de marzo de 2026, la duración máxima de los certificados SSL/TLS se reducirá de 398 días a 200 días. Posteriormente, el 15 de marzo de 2027, esta duración se reducirá aún más a 100 días, y finalmente, el 15 de marzo de 2029, la duración máxima será de solo 47 días.



Además, a partir de esta última fecha, tan solo se podrá reutilizar la información de validación de los dominios durante 10 días, una vez pasado ese periodo, habrá que solicitar un nuevo certificado con toda la información de validación del dominio.

Por todos estos cambios, es por lo que se subraya la necesidad de disponer de una plataforma que permita la renovación y despliegue automático de certificados SSL, desde su creación hasta su revocación, que garantice el cumplimiento continuo con la normativa y al mismo tiempo, permita mantener la seguridad de las transacciones electrónicas.

En el ejercicio de sus competencias, la Agencia procedió a la tramitación del expediente de contratación denominado “*SERVICIOS INTEGRALES DE CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (2 LOTES)*”, ECON 171/2020, actualmente en ejecución.

Estando prevista su finalización el 31 de mayo de 2026 y ante la necesidad de dar continuidad a la utilización por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid de los diferentes sistemas de certificación electrónica, claves para conseguir el objetivo de garantizar el derecho de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a relacionarse por medios telemáticos con la Administración, de manera segura, confiable y con todas las garantías necesarias, se hace necesario proceder a una nueva licitación.

Por otra parte, en el expediente anterior, ECON/171/2020, el servicio de identificación y firma con certificados electrónicos de empleado público centralizados se configuró como un lote

independiente con el fin de evaluar su posible integración en el ecosistema de servicios de confianza ofrecido. Sin embargo, durante la vigencia del contrato, quedó acreditado que, este servicio no se llegó a integrarse con los sistemas corporativos, debido a la complejidad técnica y organizativa de su despliegue, por tanto, no se llevaron a cabo las tareas para la puesta en marcha. Esta falta de implantación impidió obtener evidencias de uso o beneficios operativos que justificaran mantener este servicio, en la propuesta actual.

Por otra parte, durante la ejecución del contrato, en el expediente anterior ECON 171/ 2020, no se observó una demanda efectiva por parte de las unidades usuarias, teniendo en cuenta que, los escenarios comunes de uso ya estaban cubiertos mediante certificados de empleado público existentes u otros mecanismos de autenticación corporativa, y los potenciales usos de mejora para aplicaciones móviles no se llegaron a desarrollar, lo que planteaba que el coste de operación y mantenimiento de este servicio de identificación y firma centralizado resultaba desproporcionado para el volumen real de utilización previsto.

Por último, la centralización de certificados exigía inversiones adicionales en infraestructura, soporte, gestión de ciclo de vida y controles de seguridad, que no generan retorno suficiente y que añadirían complejidad tecnológica y operativa sin un beneficio proporcional.

A la vista de los resultados y del análisis comparativo entre ambos expedientes, puede concluirse que la continuidad de este servicio no es necesaria ni eficiente. Su exclusión permite, evitar costes no justificados, simplificar la estructura del contrato, reducir riesgos de despliegue, y focalizar la licitación en los servicios que sí son necesarios.

Por todo ello, y conforme a los principios de eficiencia, racionalidad y buena gestión del gasto público, se considera justificado y oportuno no incluir este servicio en la nueva licitación, ni como lote separado ni integrado con el resto de servicios contratados.

Ante la necesidad de garantizar la cobertura de las necesidades descritas, y siendo competencia de la Agencia proporcionar el servicio que se pretende, atendiendo a la especificidad de los servicios que constituyen su objeto, y la necesidad de abordar los mismos de manera eficaz y con las garantías requeridas, procede la tramitación del oportuno expediente de contratación.

Por lo tanto, sobre la base del valor estimado del contrato, con la pretensión de recibir el mayor número de proposiciones, a fin de obtener un criterio de selección objetivo, y en base a la mejor relación calidad-precio, se propone la tramitación del oportuno expediente para la contratación de los citados trabajos, a adjudicar mediante **procedimiento abierto con pluralidad de criterios** en virtud de lo establecido en *los Artículos 131.2, 145 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)*.

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato es la prestación de los *servicios de certificación electrónica necesarios en orden a garantizar la validez y eficacia de la emisión y recepción de comunicaciones y documentos producidos a través de técnicas y medios telemáticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.*

Los trabajos y servicios desarrollados al amparo de este contrato se desarrollarán mediante un modelo de prestación en modalidad de acuerdos de nivel de servicio, todo ello de conformidad con lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

División en lotes: No.

Justificación de la no división en lotes:

Dadas las características del servicio que constituyen el objeto del contrato, y la interrelación entre diferentes trabajos que han de prestarse sobre una única plataforma, se justifica la no división del objeto del contrato en lotes, teniendo en cuenta que no existen distintas fracciones del objeto del contrato que gocen de sustantividad propia y que sean susceptibles de utilización y aprovechamiento por separado, dado lo siguiente:

En primer lugar, las actividades deben llevarse a cabo por un único Prestador de Servicios de Certificación (Autoridad de Certificación) especializado en la materia, que posea el equipamiento, infraestructura, tecnología y conocimientos necesarios para llevarlos a cabo, con medios propios, ya que de lo contrario se pondría en riesgo la correcta coordinación de la ejecución del contrato, e imposibilitaría la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico, al tratarse de prestaciones íntimamente ligadas entre sí.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el estamos ante un servicio integral y que el objeto del contrato se desarrolla sobre una única plataforma de software, en el que se solapan e interrelacionan íntimamente los servicios requeridos, si se previese la realización independiente de los servicios contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas por distintos adjudicatarios mediante la división en lotes del contrato, desde el punto de vista técnico, se imposibilitaría la correcta ejecución de los diferentes servicios ya que éstos son interdependientes unos de otros.

Además, el objeto del contrato se desarrolla con un equipo multidisciplinar que tiene que estar coordinado y dirigido por un mismo adjudicatario, que se responsabilice de que todos los trabajos sean compatibles entre sí y de garantice la conectividad del sistema en su conjunto, existiendo una íntima relación técnica de los diferentes sistemas implicados, así como sus ámbitos técnicos y funcionales, requiriendo el conocimiento de las soluciones completas de manera que se asegure la compatibilidad, sostenibilidad, escalabilidad y adecuación de cualquier solución dada, puesto que el desarrollo de unos servicios impacta directamente en la ejecución de los otros de manera cíclica.

La realización independiente de los servicios contemplados en el Pliego de Prescripciones Técnicas por distintos adjudicatarios, mediante la división en lotes del contrato, desde el punto de vista de coordinación imposibilitaría la correcta ejecución del contrato, que daría lugar a intereses contradictorios que conllevarían la pérdida de calidad del servicio. Así mismo, las no conformidades resultantes de una inadecuada ejecución del contrato serían mucho más complejas de atribuir a uno de los contratistas. Como se infiere de lo anterior, puede producirse una clara ruptura del proceso de provisión del servicio.

Así mismo, debemos ponderar, ante todo, el principio de eficiencia que supone obtener un resultado al menor precio posible. El pliego está diseñado para aprovechar todas las sinergias que supone el aprendizaje al menor coste, lográndose así una prestación del servicio óptima.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y a la vista de que el objeto del contrato ha de ser ejecutado por un único Prestador de Servicios de Certificación, no se puede prever la realización independiente de cada una de las partes mediante su división en lotes.

Código CPV:

- **79132000-8 Servicios de certificación**

Este código se ha seleccionado como el principal del contrato, ya que se fundamenta en que el objeto principal del contrato es la contratación de una entidad externa y acreditada para llevar a cabo procesos formales de evaluación y emisión de certificados. Es el más adecuado, cuando la prestación implica la verificación, por parte de un tercero independiente, de que un sistema,

proceso, producto, servicio o persona cumple con las normas, estándares o requisitos específicos (nacionales o internacionales) en materia de certificados electrónicos.

Así mismo, cuando la prestación, incluye la expedición de certificados, mediante la expedición formal de un documento que acredita dicho cumplimiento, otorgando validez y reconocimiento oficial o de mercado.

- **79132100-9 Servicios de certificación relacionados con la firma electrónica.**

Este código, es una subdivisión específica del código general 79132000-8 ("Servicios de certificación"). Su uso es obligatorio cuando el contrato, como es el caso, se centra exclusivamente en los servicios necesarios para la implementación y gestión de la firma electrónica y, en su caso, del sello electrónico y otros servicios de confianza. En el ámbito de la administración pública, la contratación de estos servicios es fundamental para garantizar la validez legal, la seguridad y la interoperabilidad de las comunicaciones y trámites electrónicos con ciudadanos y otras administraciones. La justificación hace referencia a la necesidad de cumplir con la normativa vigente en materia de administración electrónica que exige el uso de certificados cualificados.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución del contrato será de **TREINTA Y SEIS MESES**. A efectos del cálculo del presupuesto y la distribución del importe por anualidades, se ha estimado como fecha de inicio el **1 de abril de 2026**.

Plazos parciales:

- **Fase de Puesta en Marcha del Servicio:** El plazo de ejecución será como máximo de **2 meses**, a contar desde el inicio del contrato, de conformidad con lo establecido en el apartado 1 de la cláusula 9ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- **Fase de Pleno Servicio:** El plazo de ejecución será de **34 meses**, desde la finalización del periodo anterior, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de la cláusula 9ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.
- **Fase de Transición de Salida y de Transferencia del Conocimiento:** Será como máximo de 2 meses, coincidiendo con los últimos meses de la Fase de Pleno Servicio, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de la cláusula 9ª del Pliego de Prescripciones Técnicas.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

El importe máximo del contrato no podrá superar el presupuesto máximo de licitación, que asciende a **DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.128.027,98 €)**, IVA INCLUIDO, siguiendo el siguiente desglose de conceptos, importes y anualidades:

CONCEPTOS	AÑO 2026 (9 meses)	AÑO 2027 (12 meses)	AÑO 2028 (12 meses)	AÑO 2029 (3 meses)	TOTALES (36 meses)
FASE PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO	36.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.160,00 €
CUOTA FIJA (FASE PLENO SERVICIO)	224.974,26 €	385.670,16 €	385.670,16 €	96.417,54 €	1.092.732,12 €
CUOTA VARIABLE (FASE PLENO SERVICIO)	77.339,54 €	208.476,38 €	257.773,88 €	86.218,89 €	629.808,69 €
IMPORTES TOTALES, (sin IVA)	338.473,80 €	594.146,54 €	643.444,04 €	182.636,43 €	1.758.700,81 €
IVA 21 %	71.079,50 €	124.770,77 €	135.123,25 €	38.353,65 €	369.327,17 €
IMPORTES TOTALES, (IVA)	409.553,30 €	718.917,31 €	778.567,29 €	220.990,08 €	2.128.027,98 €

Por lo anteriormente expuesto, esta Dirección propone el inicio de los trámites oportunos para proceder a la contratación de los servicios referenciados.

La Subdirectora General de Soluciones

Firmado digitalmente por: ANA DOLORES GARCÍA RANERA
Fecha: 2026.02.19 15:15

Fdo.: Ana García Ranera.